

“Centro Mandela DD. HH.”

CENM

Centro de Estudios e Investigación Social

Avenida Alberdi N° 338 - Resistencia - Chaco - C.P. 3500
www.centromandela.com www.cenm.com.ar

Tel/fax: (54 - 03722) 428475
E mail: info@centromandela.com

Nuevo proyecto de ley para fumigar con agrotóxicos a las poblaciones del Chaco. Se facilitará el uso libre o descontrolado de agroquímicos

NEGOCIOS SON LOS NEGOCIOS

En la Cámara de Diputados, sin bastante orientación ni dirección que no sean los intereses del mercado, se inició el debate sobre la futura ley de biocida. La trascendencia de este instrumento legal pareciera ser que no ha sido suficientemente entendida por nuestros legisladores, sobre todo si consideramos las extraordinarias expansiones de las fronteras agropecuaria y ganadera que se ha acelerado en el curso de los últimos años, provocando el notable incremento del uso masivo de agroquímicos.

La actual legislación vigente no es muy buena; no obstante ello, es mejor que las iniciativas que se están manejando y el proyecto cuyos perfiles más importantes comienzan a tomar forma. La ley vigente contempla, en mejor medida aunque insuficientemente, la vigencia de los principios de prevención y de precaución, mientras que la que se pretende sancionar adolece de omisiones y de fallas que no son desinteresadas y que afectan tales postulados, que son los que debieran alimentar la discusión parlamentaria y la redacción de la futura norma orientada a modificar la actual ley de biocida.

Salvo en muy pocos territorios, America Latina carece de una legislación progresista que ante el crecimiento acelerado de las fronteras productivas primarias protejan los valores sociales, sanitarios, ambientales y de biodiversidad que son indispensables para preservar nuestro futuro. En casi todas las latitudes se priorizan las actividades productivas, la generación de riqueza, el aumento del producto bruto interno de cada país y los resultados positivos de las balanzas internacionales, en un mercado mundial en expansión como consecuencia del aumento del consumo. A lo lejos, muy distante de las ponderaciones de la evolución de las macros economías de regiones y de países, figuran los pueblos y los escenarios comunes que significan los ambientes que habitan. Predominan, con toda claridad, las lógicas -dogmáticas y muy duras- del mercado global y sus componentes locales. Sus reglas imperan casi como inevitables, sin discusiones o a pesar de los debates aparentes que no sirvieron para cuestionar las consecuencias, directas y colaterales, del uso de pesticidas y fertilizantes. En este sentido, Chaco se destaca por su alta permisividad porque se aplican agroquímicos sin ningún tipo de control dado que la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Producción del Chaco, que es el organismo encargado de aplicar la actual ley de biocida, es un organismo absolutamente burocrático, totalmente ineficiente y funcional a la mecánica agrícola, con eje en el uso masivo de un complejo paquete de agrotóxicos, que inevitablemente produjo un formidable impacto negativo en lo social, sanitario y ambiental, que no ha sido científicamente diagnosticado porque los gobiernos deliberadamente omitieron realizar los estudios epidemiológicos que habrían puesto al descubierto los daños ya provocado.

Una ley selectiva

La nueva legislación que se pretende sancionar no es plural; por lo tanto, tutelaré intereses sectoriales, netamente económicos. Es evidente que no fueron receptadas las diferentes corrientes de pensamientos científicos y no científicos desarrollados sobre este tema. Está ausente la plena participación institucional de los distintos sectores e instituciones y, fundamentalmente, de los habitantes de los distintos territorios que conforman el Chaco. Y esto es vital, puesto que cada poblador de las distintas zonas agropecuarias son y serán aún más damnificados por el uso de los agrotóxicos. Tampoco han participado, orgánicamente, los representantes e integrantes de los ministerios a cargo de los servicios primarios de salud, educación y seguridad social, especialmente de hospitales, puestos sanitarios, escuelas y los restantes establecimientos que funcionan a lo largo de la geografía provincial. En definitiva, no se alentó ni se produjo una participación institucional, activa y constructiva, que debió implementarse de manera descentralizada, en los puntos

estratégicos, a través de la realización de encuentros, mesas de trabajos y talleres locales que no fueran objeto de manipulación, en donde se pudieran expresar todas las voces.

Es evidente que la nueva ley no será la expresión de un verdadero debate interdisciplinario, en el que activamente debieran haber participado quienes militan y practican los principios y conocimientos de sociología, antropología, biología, geología, hidrología, climatología, expertos en vientos, ecología y ambientalismo, entre otros conocimientos normalizados. Es más claro aún que predominarán los intereses económicos de la escuela neoliberal, quedando en evidencia que prosperan los intereses de los laboratorios multinacionales y sus socios locales, seguidos de cámaras empresarias, comerciantes, aplicadores y productores agropecuarios, con el corolario de pobladores fumigados e indefensos, por lo que seguirán las dosificaciones y aplicaciones descontroladas de agrotóxicos, sin ningún tipo de monitoreo social ni institucional y sin información genuina. Por si faltara algún factor objetivo que anticipa los aspectos altamente negativos de la nueva legislación, basta con señalar las distancias insuficientes que aparentemente se contemplarán para los distintos tipos de aplicaciones, que serán absolutamente negativas para proteger la salud de los pobladores y el ambiente, anticipándose la contaminación de los cursos de aguas, que serán contaminados por los plaguicidas y fertilizantes por arrastres de partículas sólidas por erosión y por escurrimientos por lluvias, de modo que será dudosa la aplicación de la nueva ley para establecer, en el mediano y largo plazo, las inevitables acumulaciones y persistencias de los agrotóxicos en la salud de la población, en el ambiente y en la biodiversidad.

En definitiva, el proyecto que se baraja se asemeja o se asocia demasiado a la persistente y sistemática política de ocultamiento o manipulación de la información relacionada con los riesgos y daños sociales, sanitarios y ambientales que derivan del uso masivo e indiscriminado de pesticidas y fertilizantes. Esta es la estrategia que políticamente utilizan para continuar apoyando, de manera oculta o abierta, la expansión de la frontera agropecuaria, fundamentalmente la transgénica. Parece inevitable, por ahora, que la dirigencia y funcionarios públicos continúen ocultando tales riesgos y daños, con el argumento de que no fueron científicamente comprobados porque no se realizaron las correspondientes investigaciones epidemiológicas. Este es, justamente, el discurso que esgrimen los beneficiarios del modelo transgénico, defensores desembozados y a ultranza del uso libre de los agrotóxicos, tras el falso slogan de la agricultura sustentable. Pareciera que peronistas, radicales y algunos socios menores de Chaco se pondrán de acuerdo, nuevamente, para profundizar el nefasto modelo de agricultura transgénica que comenzó a implementarse en la Argentina durante la Presidencia del nefasto Carlos Menem, que apoyaron y que apoyan los conservadores, los neoliberales, los progresistas y los falsos progresistas, amontonados de cualquier manera, pero con las mismas o parecidas ambiciones, hasta los que con cinismos indisimulados utilizan la palabra revolución, cambios, transformaciones y bienestar general, bajo el esquema de una republiqueta transgénica que presentan como libre y soberana. Esconden el carácter absolutamente excluyente del esquema de producción que han implementado y que vigorosamente está vigente. Ocultan que el modelo agropecuario no crea puestos de trabajo. Esto generó que gran parte de la producción sea monopolizada por los sectores más concentrados del poder económico, con el apoyo político de los sucesivos gobiernos. El selecto manejo de los productos transgénicos y de todos los resortes de los mercados de producción, de consumo y de agroexportación en manos de muy pocas empresas, se formalizó y se consolidó a cambio de planes y subsidios de todo tipo para las grandes mayorías sociales, que fueron excluidas del trabajo y de la dignidad.-

[Resistencia, 27 de mayo de 2011](#)